Martin Friedl
Oficial de Programa para América Latina y el Caribe. CIPE. Estados Unidos

Aleksandr Shkolnikov
Oficial de Programa para Programas Globales. CIPE. Estados Unidos

¿Pueden implantarse economías de mercado democráticas en América Latina?

Las poco exitosas reformas implantadas en los noventa en América Latina no deben ser razón para que la región no siga enfrentando sus problemas sociales con soluciones orientadas a cumplir el mismo objetivo de siempre: sacar a la gente de la pobreza.

Los recientes aumentos de precios de los alimentos básicos y de los principales bienes primarios están afectando a muchos países. Las protestas crecen a medida que los gobiernos tratan de encontrar la manera de ayudar a los pobres a enfrentar este problema verdaderamente global. Algunos estados -como Argentina- restringen las exportaciones, mientras otros liberan los requisitos de importación para impulsar artificialmente la oferta local. Otros, como Venezuela, van más lejos y nacionalizan compañías para devolver el manejo de recursos al control del gobierno.

En últimas, el problema que deben resolver los gobiernos en América Latina y en otras partes es el mismo desde hace varias décadas: ¿cómo sacar a la gente de la pobreza? Los precios en alza acrecientan este problema de desarrollo, pero también lo hacen las acciones de los gobiernos. En Argentina, por ejemplo, los recientes aumentos en los controles a las exportaciones (para acallar a los pobres) generaron conmoción entre los exportadores y entre quienes dependen en gran medida del comercio con otros países. La decisión del gobierno de Evo Morales de congelar las exportaciones hasta que la demanda nacional estuviera atendida también ha sido recibida con una oleada de protestas de los productores de aceite de cocina.

Sin importar cual sea el tema, los líderes latinoamericanos parecen atrapados en un círculo vicioso. Si no hacen nada, se enfrentan a hordas de pobres para quienes se ha vuelto cada vez más difícil sobrevivir con sueldos estancados. Sin embargo, muchas de las medidas implementadas por estos líderes parecen hacer que se desocupen los estantes, llevando a la agitación a los que están en capacidad de proveer a la economía local, y que dependen mucho del comercio con otros.

Este círculo vicioso no tiene por qué persistir. Hay estrategias que pueden ayudar a los países a atender los problemas

que enfrentan, los cuales se reducen simplemente a sacar a la gente de la pobreza. Al responder a los retos del desarrollo de hoy, bien sean los crecientes precios de los alimentos o cualquier otro aspecto, los gobiernos en América Latina se enfrentan al dilema central de crear riqueza sin caer en la trampa de un populismo que no da la talla. Aunque la región es el hogar de soluciones sostenibles de alivio de la pobreza (replicadas alrededor del mundo), el populismo aún aparece con fuerza.

LAS LECCIONES DE LOS OCHENTA

Mientras algunos intentan extender el mensaje de la reforma institucional y la reducción de la pobreza alrededor del mundo, América Latina aún mantiene algunas de las economías más desiguales del mundo. Las reformas democráticas y de mercado están en espera por todo el continente y es cada vez más evidente que los problemas en el centro del descontento con los experimentos de liberalización son los mismos sobre los que los expertos alertaron hace décadas y sobre cuyas soluciones se ha trabajado tan arduamente: la falta de derechos de los pobres y la marginalización de grupos indígenas. Estos ciudadanos encuentran cerradas las puertas del sector formal, tanto política como económicamente.

Estos problemas no son nuevos. Cuando los países latinoamericanos emergieron de la era de regímenes dictatoriales en los ochenta, había una necesidad clara de que las reformas políticas fueran de la mano con las económicas. En el ámbito político, las reformas tenían que promover la apertura de las instituciones políticas a la inclusión y a la participación: los cimientos de la democracia más allá de las elecciones. En el ámbito económico, las reformas tenían que enfocarse en la construcción de sistemas económicos basados en el acceso equitativo, el Estado de derecho y la libre empresa, en lugar del favoritismo y la corrupción. Las reformas debían ser implementadas con una meta final en mente en ambos ámbitos: no solamente aumentar el PIB, sino mejorar los estándares de vida.

A comienzos de los noventa, las historias de éxito en la implementación de tales reformas eran escasas. El pobre desempeño de las economías latinoamericanas en esa década era una señal clara para la nueva ola de gobiernos democráticos en la región de que había una necesidad urgente de reformar las instituciones democráticas si querían pasar por la última década del siglo XX y lograr cierta legitimidad. Muchas de las políticas implementadas en los ochenta tuvieron efectos devastadores en las economías de la región. En el nivel macro, eventos como la crisis financiera de México en 1982 mostró problemas estructurales profundos en cuanto a arreglos económicos. En el nivel micro, la confianza en las reformas económicas comenzó a disminuir a medida que los ciudadanos vieron descender sus estándares de vida, mientras que las promesas de prosperidad (debido a la sustitución de importaciones y el proteccionismo) se materializaron para unos pocos solamente. América Latina entró en los noventa con una situación inaceptable, en la que casi el 40% de la población del continente estaba viviendo por debajo de la línea de la probreza[1].

Los ochenta fueron llamados la "década perdida" en América Latina y por un buen motivo: las políticas que favorecieron la fuerte intervención del gobierno en la economía y las medidas proteccionistas no lograron el crecimiento económico y, de hecho, llevaron a descensos en el estándar de vida. Esos esfuerzos fracasaron, incluso en los casos en los que se intentó una verdadera reforma. A ratos, las políticas bien concebidas se toparon con una muralla de instituciones de gobierno ineficientes y con la implementación parcial. Al entrar en los noventa, el conocimiento acerca de las reformas de mercado se comenzó a aplicar a la política pública –en particular a la importancia de los derechos de propiedad y la responsabilidad fiscal–; sin embargo, el énfasis se puso en las buenas políticas, sin prestar mucha atención a los problemas estructurales subyacentes tras el diseño y la implementación de esas. El sector energético en Brasil es sólo un ejemplo de cómo la privatización incompleta y la liberalización parcial de precios amenazan la promesa de precios más bajos, mayor inversión y mejores servicios. En últimas, se impulsan el descontento con las reformas de mercado.

LAS LECCIONES DE LOS OCHENTA... VISTAS DE NUEVO

Si repasamos los noventa, lo que ocurre hoy en algunos países latinoamericanos podría despistar a quienes aún recuerdan los ochenta. Los líderes populistas están retornando con fuerza en la región, abogando con frecuencia por los mismos tipos de reformas que hicieron los ochenta tan difíciles para los ciudadanos desde el punto de vista socio-económico. En los países donde tales líderes no ganan las elecciones, aún disfrutan del fuerte apoyo de los ciudadanos (30 a 40%). En los países donde sí ganan, vemos el control gubernamental deslizándose de nuevo al ámbito económico.

Evo Morales ganó las elecciones presidenciales de Bolivia con el voto mayoritario; la primera vez en los últimos 20 años que un presidente fue capaz de lograr una mayoría en ambas cámaras del Congreso boliviano. Su éxito electoral fue primordialmente el resultado de manejar una campaña reaccionaria en contra de las reformas económicas implementadas por el ex presidente Sánchez de Lozada, depuesto en una serie de protestas que paralizaron el país. El presidente Morales nacionalizó los hidrocarburos por decreto presidencial, implementó una cuestionable reforma de tierras y amenazó con la propiedad más extensiva del gobierno a industrias clave. En términos sencillos, Bolivia está regresando a un período en que el Estado tuvo una mano fuerte en la economía.

Los resultados de la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales peruanas también mostraron la decepción de los ciudadanos con las reformas económicas. Ollanta Humala, un populista nacionalista y ex líder militar virtualmente desconocido un año antes de la elección, recibió el más amplio apoyo de la población en la primera vuelta presidencial. Humala fue seguido por Alan García, el ex presidente de Perú que llevó el país hacia la hiperinflación y la

inestabilidad política, y quien en últimas ganó la elección en la segunda vuelta. Lourdes Flores, candidata orientada a las reformas de mercado, quedó en tercer lugar. Ella prometió seguir el curso de las políticas económicas exitosas, bajo las cuales Perú logró niveles altos de crecimiento económico en los noventa. No obstante, no pudo convencer a una mayoría de peruanos para que votaran por ella. Aunque Humala en últimas perdió las elecciones, el amplio apoyo a su mensaje no se puede ignorar.

Abundan ejemplos similares por toda la región y se han cubierto y debatido ampliamente en los medios bajo la rúbrica del regreso del populismo. Mirando a América Latina hoy, algunos pueden concluir que sus ciudadanos son desmemoriados y han olvidado que tales políticas llevaron sus economías al suelo en los ochenta.

Pero ¿por qué votan tantas personas en la región por candidatos que se presentan sobre una plataforma de agenda anti-mercado? ¿Por qué es tan baja la popularidad de reformas económicas que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de los países en los noventa? y ¿por qué, a su turno, son apoyadas por grandes segmentos de sus ciudadanos las políticas que tienen una larga historia de resultados negativos?

EL SECTOR INFORMAL IMPORTA

Una de las claves para entender el descontento en América Latina es dejar de lado las estadísticas macroeconómicas y mirar la experiencia de la región en cuanto al desarrollo de las últimas décadas a través de los ojos de un ciudadano promedio. ¿Ha mejorado la vida? ¿Las personas han podido disfrutar el acceso a servicios públicos prometidos con la privatización, acceso a los bienes y servicios prometidos con el libre comercio, o el aumento de oportunidades económicas y acceso a las instituciones políticas prometidas con la democracia? También es importante mirar la experiencia con el desarrollo a través de los ojos de los empresarios y hacer preguntas similares desde el punto de vista de quienes se desenvuelven en el sector de la pequeña y mediana industrias (Pymes), aquellos que no tienen conexiones privilegiadas con el gobierno o tratamiento preferencial en cuanto a políticas.

Al hablar con la gente en Perú antes de las elecciones presidenciales de 2006, era fácil ver que una razón por la que los peruanos, al igual que los ciudadanos en otros países latinoamericanos, se han alejado de los candidatos pro mercado es que los beneficios de las reformas económicas no fueron compartidos por igual en toda la población. Las reformas administrativas y títulos de propiedad para el sector informal ayudaron a aquellos que vivían en Lima y en sus alrededores a prosperar en un clima de negocios mejor. Sin embargo, en el sur del país, las reformas incompletas tuvieron poco impacto sobre el desempleo. Allí, la población siguió apartada en gran medida de los beneficios de las políticas nacionales implementadas.

En cuanto los altos niveles de crecimiento macroeconómico no se tradujeron en más puestos de trabajo y más oportunidades en el sur; para aquellas personas las políticas económicas nuevas no eran de valor significativo. Esta situación fue mucho más difícil al considerar las reducidas inversiones en infraestructura por parte del gobierno del presidente Toledo. Como tal, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2006 estaban esencialmente divididos entre aquellos que lograron un mejor estándar de vida, como resultado de las reformas económicas, y aquellos cuyos estándares de vida fueron ignorados por el gobierno nacional. Mientras Lourdes Flores, candidata pro reformas de mercado ganó más votos en la capital y alrededor de ésta, Ollanta Humala, quien abogaba por una fuerte intervención estatal en la economía, ganó en el sur del país[2].

Esta situación se repite en muchos otros países de la región. Aunque el crecimiento económico de los noventa ha reducido la pobreza, la distribución desproporcionada de los beneficios del crecimiento a menudo anuló –desde el punto de vista político– muchos de los éxitos económicos logrados.

Un vasto sector subterráneo e informal sigue siendo un claro obstáculo al crecimiento económico. En el caso de Guatemala, por ejemplo, el Centro de Investigación Económica Nacional (CIEN) estimó que el 75% de la población económicamente activa está empleada en el sector informal. Esto hace de Guatemala el país con el porcentaje más grande de informalidad en Centroamérica. Muchos otros países no están muy detrás.

La investigación de CIEN sobre el sector informal muestra que las comunidades indígenas en Guatemala son los "empresarios olvidados", desconectados de un gobierno que quiere hacer cumplir regulaciones ajenas a su

Pasar de hablar de los problemas de la gente –que ciertamente hacen bien los populistas– a buscar soluciones que funcionen es, tal vez, el reto principal que enfrentan los sistemas políticos latinoamericanos.

manera de hacer negocios. Encuestas realizadas por CIEN entre los empresarios informales destacan que no hay un incentivo real para que estos empresarios formalicen sus actividades. Las consecuencias de tener un sector informal tan grande son devastadores para la economía guatemalteca. A manera de ejemplo, los trabajadores informales producen en promedio 5,66 veces menos que los trabajadores formales[3].

La productividad no es el único problema. Lo más importante es que los empresarios informales viven en una sociedad paralela, privados de servicios básicos, derechos formales de propiedad y acceso al crédito o espacios de participación en muchos sectores económicos. Como tal, el sector informal es simplemente incapaz de aprovechar plenamente las políticas económicas que estimulan el crecimiento, incluidos los tratados de libre comercio. Esto, a su turno, produce el descontento con las promesas que simplemente no se materializan. En forma similar, al estar atrapadas en el sector informal, las personas tienen pocas vías para participar en el gobierno.

Se necesita más para impulsar el cambio institucional que reduzca la informalidad y romper las barreras a la participación. Pasar de hablar de los problemas de la gente –que ciertamente hacen bien los populistas– a buscar soluciones que funcionen es, tal vez, el reto principal que enfrentan los sistemas políticos latinoamericanos.

UNA PALABRA SOBRE LA PRIVATIZACIÓN

La privatización de empresas estatales se volvió uno de los mecanismos clave en la reforma de las economías latinoamericanas dominadas por gobiernos autoritarios en los ochenta y comienzos de los noventa. Como tal, la privatización en sí misma se volvió la "cara visible" de la reforma económica en la región. No obstante, muchos de los procesos quedaron incompletos y, en muchos casos, no fueron seguidos por reformas de mercado fundamentales. Aunque puede haber cambiado la propiedad física de las empresas, el clima dentro del cual operaban a menudo siguió igual, regido por relaciones políticas cercanas y oscuras transacciones. En consecuencia, los fracasos de la privatización fueron vinculados al fracaso general de las reformas económicas.

Históricamente, las empresas estatales en América Latina controlaban amplias secciones de la economía y muchas fueron creadas bajo regímenes dictatoriales que prometieron entregar más bienes y mejores servicios a la población administrando ellos mismos las empresas "estratégicas". Sin embargo, las industrias nacionalizadas se desempeñaron pobremente debido a la mala administración y el peso de las consideraciones políticas sobre las económicas, a una cultura de nepotismo y extenso amiguismo, y a la falta general de conocimiento técnico. Los llamados para la nacionalización hoy en día no son muy distintos a los llamados para crear empresas estatales en el pasado.

El proceso de privatización se ha visto atacado en años recientes en varios países latinoamericanos. Algunos líderes han abogado abiertamente por reversar las privatizaciones e incluso han tomado pasos concretos para nacionalizar algunas industrias. No son únicamente los líderes de Venezuela y Bolivia quienes están reversando privatizaciones y nacionalizando compañías. Hay otros, incluidos los ganadores de elecciones y aquellos que pierden por poco. Ottón Solís, por ejemplo, quien perdió las elecciones presidenciales de 2006 en Costa Rica por un margen muy estrecho, ha abogado por detener las privatizaciones y por evitar que las grandes empresas estatales sean privatizadas. Aunque finalmente perdió la carrera presidencial, el amplio apoyo a las políticas de Solís debería disparar alarmas.

En los países donde se ha llevado a cabo una renacionalización, ésta ha hecho resurgir los problemas del pasado. La reciente expropiación de los recursos de petróleo y gas en Bolivia, por ejemplo, alejó a las firmas extranjeras, que se llevaron su conocimiento técnico y su muy necesario capital. Desde entonces, la producción ha disminuido tanto que Bolivia ya no puede cumplir su contrato para vender gas natural a Argentina y apenas suficiente para el uso doméstico[4].

¿Por qué sienten los ciudadanos que su situación económica mejoraría enormemente si los gobiernos sencillamente pusieran a las rebeldes industrias bajo su control? Una de las principales razones es que la privatización simplemente se ha vuelto una mala palabra en América Latina, equiparada frecuentemente con prácticas corruptas que benefician a las élites y dejan a los pobres de lado. La privatización no ha sido identificada con una idea más amplia de reforma económica, sino que ha nacido entorpecida por privatizaciones incompletas y parciales. En Argentina, por ejemplo, además de a la corrupción descarada, los contratos de privatización incluían a menudo garantías para las compañías que compraban empresas estatales. Tales cláusulas van en contra del principio central detrás de la privatización –la creación de transacciones de mercado abierto– y simplemente transfieren los subsidios del gobierno de unas manos a otras.

Además, los ingresos por las ventas rara vez han sido usados para atacar problemas clave de reforma económica. El gobierno de Argentina usó los ingresos obtenidos de la venta de empresas estatales para pagar pensiones. Cuando los ingresos no fueron a los pobres, terminaron a menudo en las cuentas bancarias privadas de políticos y de los que estaban en el poder. En lugar de personificar la eficiencia y mejores servicios, la privatización ha llevado,

en la mente de muchos, a monopolios instituidos bajo prácticas corruptas.

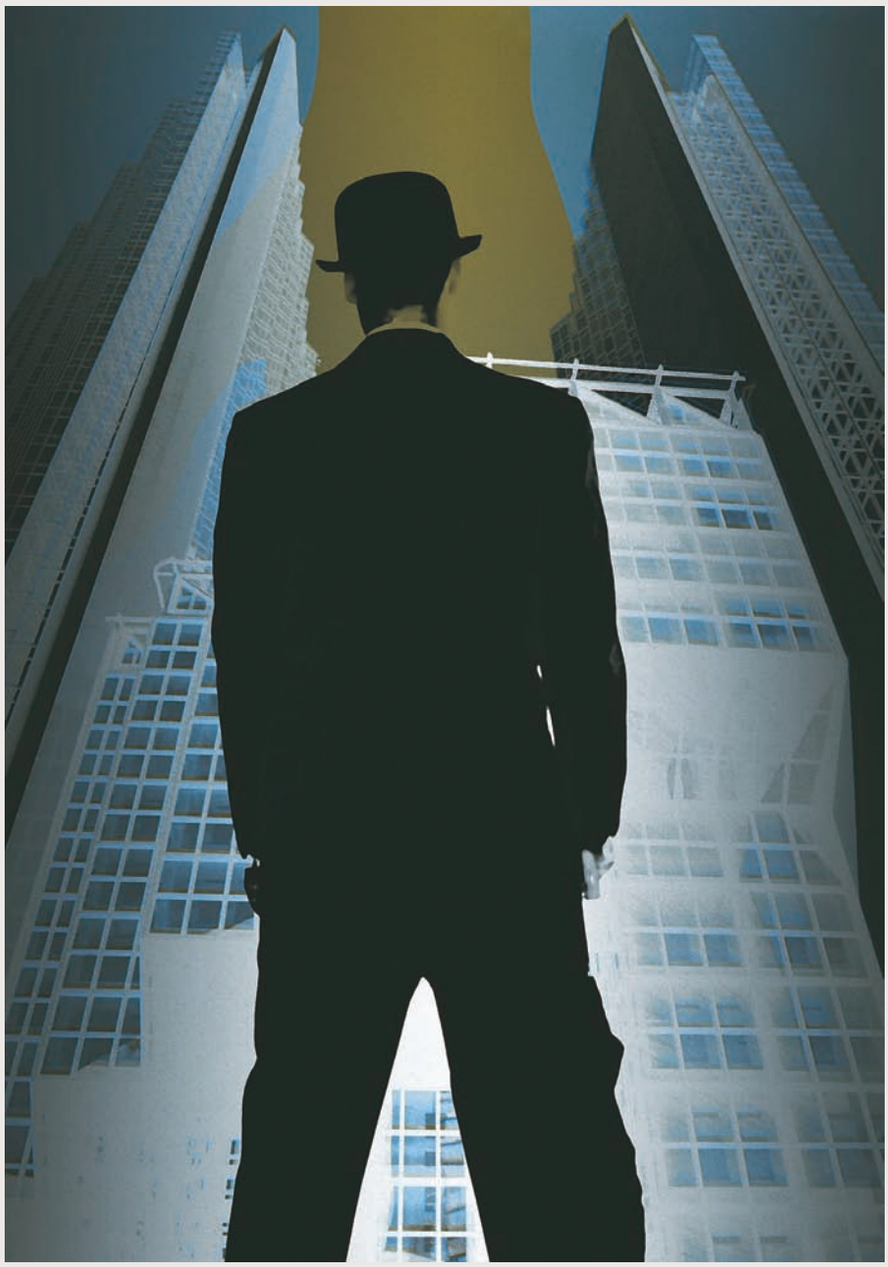
No obstante, los países latinoamericanos deben seguir con el proceso de reformar sus economías. Hay historias regionales de éxito que se deben divulgar para inspirar a la acción. Chile es una de estas historias de éxito, ya que ha podido impulsar una agenda pro reforma y, además de lograr tasas de crecimiento económico impresionantes, ha podido reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza.

EL FRACASO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Las privatizaciones incompletas son sólo un ejemplo de reformas parciales que han minado muchos esfuerzos legítimos de desarrollo en la región. Se ha puesto mucho énfasis en culpar a la comunidad internacional, simbolizada frecuentemente por el Banco Mundial y el FMI; sin embargo, los partidos políticos domésticos merecen su porción de crítica. El apoyo político a las reformas de mercado en la región ha mermado porque los partidos políticos han sido incapaces o no han querido presentar una agenda de reforma funcional a sus electorados. En muchos casos, los líderes políticos en América Latina no han 'vendido' las reformas a los ciudadanos, avanzando con la implementación de políticas, sin construir un consenso para la reforma.

Los partidos políticos en América Latina atraen hoy en día muy bajos niveles de apoyo de la población. De hecho, la encuesta de opinión Latinobarómetro de 2007 muestra que los latinoamericanos incluyen a los partidos políticos entre las instituciones en las que menos confían. Este apoyo en descenso se puede atribuir en gran medida al hecho de que muchos partidos aún no representan verdaderamente los intereses de sus electores.

En lugar de incorporar la participación de base en el proceso de formación de políticas, muchos partidos políticos funcionan como clubes de amigos. En estos casos, el proceso político consiste en hacer un trato entre los dos partidos opositores principales para compartir el poder. Este, por ejemplo, fue el caso con el pacto de



Punto Fijo en Venezuela y el Frente Nacional en Colombia. Tales acuerdos crean una clase política aparte, con frecuencia desconectada de su base. Este sistema ofrece pocos incentivos para que los partidos políticos se vuelvan verdaderos vehículos de representación de sus electores.

El fracaso de los partidos políticos "tradicionales" en representar verdaderamente los intereses de la población, junto con altos niveles de informalidad, se puede vincular al reciente surgimiento de líderes políticos populistas. La desconfianza en las instituciones políticas establecidas ha llevado a muchos ciudadanos a seguir a líderes que aprovechan el carisma y prometen arreglos rápidos para algunos de los problemas principales. La frustración con las instituciones políticas establecidas hace que cualquier promesa suene como una buena promesa con tal que ofrezca una alternativa.

Mucha gente en la región ha aplaudido la declinación de los partidos

tradicionales y el advenimiento de líderes carismáticos que parecen conectarse directamente con la gente. Sin embargo, es importante entender los efectos devastadores de esta tendencia sobre el proceso democrático y sobre el proceso de reformas económicas. Aunque los líderes populistas hablan a la gente y dan voz a sus preocupaciones, las soluciones que ofrecen se enfocan a menudo en la redistribución, y no en una verdadera creación de riqueza.

En un mundo ideal, los partidos políticos estables son instituciones clave en el diseño de políticas coherentes, sean debatidas dichas políticas en las estructuras de partido o, más ampliamente, en la sociedad civil. Pero los candidatos populistas son como una caja de Pandora. Ofrecen poco por evaluar en términos de medidas concretas y usan su carisma para ganarse a los votantes. Los populistas forman partidos políticos para servir el propósito de ganar elecciones, no para conectarse con la población para desarrollar soluciones funcionales a problemas mayores. En otras palabras, carecen a menudo de una verdadera plataforma política y sólo están diseñados para catapultar a su candidato al poder. Los ciudadanos tienen voz en el primer paso de la democracia –las elecciones–, sin embargo rara vez pueden participar después. Incluso los nombres populares de tales partidos simbolizan su naturaleza transicional y de dominio de una sola figura política; por ejemplo, el peronismo y el gertulismo.

De hecho, Chávez declaró que el chavismo es algo que en efecto se constituye en "la dirección evolutiva última para las sociedades modernas", retando el concepto del fin de la historia expuesto por Francis Fukuyama[5]. Pero como han sostenido Fukuyama y otros, las políticas antidemocráticas y antimercado libre de Chávez, apoyadas en gran medida por los precios disparados del petróleo, han sido más de retórica y de reacciones que de esfuerzos bien considerados para enfrentar los problemas de manera sostenible.

Más allá de Venezuela, los candidatos populistas y los líderes en la región se han posicionado en clara oposición al avance de reformas económicas muy necesarias, que realmente ayudarían a enfrentar algunos problemas clave. En el campo socioeconómico, los candidatos populistas prefieren implementar planes vistosos que generan la cobertura de los medios, en lugar de dedicarse al trabajo detallado de diseñar y poner en marcha políticas que puedan fortalecer los cimientos socioeconómicos.

¿QUÉ SE DEBE HACER?

La al parecer, sempiterna resistencia a las reformas de mercado en América Latina no es tan clara como muchos creen. Al final del día, los ciudadanos no están satisfechos con las instituciones que les han fallado al negarles el acceso a los beneficios de las reformas. Los populistas han sido exitosos en captar esta frustración. Sin embargo, las políticas populistas también están encallando a medida que la nacionalización y redistribución de la riqueza son entorpecidas por la falta de verdadera creación de riqueza.

América Latina necesita lo que Hernando de Soto llamó tratados de libre comercio dentro de cada país: actualmente, no basta el intercambio nacional porque hay extensas divisiones y exclusión dentro de cada país, ejemplificadas por las enormes extensiones de informalidad. Para retirar estas barreras, los países de América Latina necesitan enfocarse en la implementación de verdaderos cambios institucionales que permitan a todos los ciudadanos participar en el proceso democrático. Quizá tengan las llaves de estas oportunidades los partidos políticos.

La solución de la crisis de los partidos políticos en América Latina es uno de los retos más grandes que enfrentan los reformistas hoy, subrayando la necesidad de desarrollar no sólo la capacidad económica para diseñar leyes y regulaciones, sino también la dimensión política de la reforma económica. Las mejoras de las instituciones políticas varían de país a país, pero algunas pueden encontrar aplicación regional más amplia, como la reciente creación de comités de ética de partidos en Costa Rica. La implementación de los tratados de libre comercio intrapaís, planteada por de Soto, requiere que las instituciones políticas se vuelvan receptivas a los aportes de los segmentos de la sociedad no sólo durante las elecciones, sino también en el periodo entre estas.

La creación de incentivos para que los partidos políticos sean más receptivos puede resultar una tarea difícil. No obstante, es claro que responder a las preocupaciones populares a través de políticas socioeconómicas acertadas es el único camino futuro y la única alternativa al populismo. América Latina ha tenido experiencia con partidos que adoptan reformas sólo de nombre, y esa experiencia ha tenido resultados devastadores. Los líderes políticos en la región están en una encrucijada: enfocarse en ofrecer soluciones concretas a problemas reales y conectarse con los ciudadanos en el proceso de la gobernabilidad o correr el riesgo de caer en el abismo del populismo. P

Notas

1. Hellwedge, Ann. Poverty in Latin America: Back to the abyss?
2. Ver también The Economic Agenda of the Left in Peru, una discusión de mesa redonda con Daniel Cordova, Ph.D., Decano de la Escuela de Economía, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Director del Proyecto Invertir, Procapitales. www.cipe.org/programs/roundtables/webevents/042406p.php
3. Maul, Hugo. Economía: Informalidad, un reto a discutir, *La Prensa Libre*, febrero 22 de 2006.
4. Murphy, John. The populist prescription. *The Washington Times*, febrero 26 de 2008.
5. Fukuyama, Francis. The end of Chavez: History's Against Him. *The Washington Post*, agosto 6 de 2006.
6. Altman, Daniel. Managing globalization: To reduce poverty, money isn't everything. International Herald Tribune, agosto 21 de 2007.

Recursos

- Córdova, Daniel. Presentación sobre The Economic Agenda of the Left in Peru, Center for International Private Enterprise, Washington, D.C., abril 24 de 2006, www.cipe.org/programs/roundtables/webevents/042406p.php
- Maul, Hugo. Economía: Informalidad, un reto a discutir. *La Prensa Libre*, febrero 22 de 2006, www.prensalibre.com/pl/2006/febrero/22/135209.html
- Oppenheimer, Andrés. Peru's Economy Booming but Peruvians Want Change. Hispanic American Center for Economic Research, www.hacer.org/current/Peru056.php